

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL**

**Escrito: SENTENCIA**

---

JUICIO: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 409/19

Concepción, 21 de febrero de 2020.-

**1.- ANTECEDENTES:**

1.1.- Con fecha 26/08/2019 (según consta en hoja 11) se presenta la PROVINCIA DE TUCUMAN - Dirección General de Rentas (en adelante DGR), por medio de abogado apoderado, para promover juicio de ejecución fiscal en contra de la firma ANZUC S.R.L., CUIT N° 30-71098220-8, con domicilio fiscal en RIVADAVIA 156 PLANTA ALTA DEPARTAMENTO 16 - CONCEPCION (C.P. 4146) - PROVINCIA DE TUCUMAN, por la suma de pesos CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 74/100 (\$5.113.433,74), deuda calculada conforme las disposiciones de la Ley Provincial N° 5121 y sus modificatorias, con más sus intereses desde la promoción de la acción hasta el día de su efectivo pago, gastos y costas judiciales.

En hojas 2 a 10 la parte actora acredita y fundamenta su pretensión en dos Cargos Tributarios: N° BTE/3435/2019 y BTE/3439/2019, que tienen su sustento en el Expediente Administrativo N° 34035/376/D/2013. El cargo tributario BTE/3435/2019 es por el siguiente concepto: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – EJECUCION DE SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA PD 1012/2016 ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA). El cargo tributario BTE/3439/2019 es por el siguiente concepto: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – INTERESES – EJECUCION SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA DE INTERESES ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA).

1.2.- Una vez realizada la intimación de pago a hojas 16, no se presenta la firma ANZUC S.R.L., en consecuencia, deja vencer el plazo para oponer excepciones legales de acuerdo con lo establecido por el Código Tributario Provincial.

1.3.- A hojas 20, fundado en las facultades otorgadas por el art. 30 C.P.C.C.T., y atento al estado del juicio, se ordena librar oficio para que la D.G.R. (Suc. Concepción) dentro del plazo de 5 días hábiles acompañe el Expediente Administrativo N° 34035/376/D/2013 base de la presente ejecución.

1.4.- Repuesto el Expediente Administrativo con sus respectivos agregados a hojas 23, en fecha 30/10/2019 (4 cuerpos, de 668 fs. totales), la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta de conformidad con el art. 179 del C.T.P. A hoja 24 el expediente pasa a resolver.

**2.- ANÁLISIS DE OFICIO DEL TÍTULO EJECUTIVO:**

2.1.- En esta instancia del análisis, corresponde de acuerdo con las facultades conferidas por el art. 492 del C.P.C. y C. de Tucumán, de aplicación supletoria, examinar la concurrencia de los recaudos legales establecidos en el art. 172 del Digesto Tributario, para determinar si el título con el cual se promueve la demanda de ejecución es un instrumento hábil (PODETTI R.: Tratado de Ejecuciones, Bs. As., 1997, n° 151; PALACIO, L.: Derecho Procesal Civil, Bs. As., 1982., N° 1069; FALCON: Código..., sobre el Art. 551, punto 9.5; FENOCHIETTO-ARAZI, Código..., sobre el art. 531.2, y también a propósito del art. 551 2 a). Lo que implicará la suerte de la demanda: seguir adelante con la ejecución o ser la misma rechazada (art. 179 CTP).

En este sentido la jurisprudencia dijo que el examen cuidadoso del título en la oportunidad prevista en el art. 531 (nuestro 492) supone una primera valoración del juez acerca de su eficacia, fuera de dicha oportunidad, el juez debe volver a apreciar la habilidad del título al momento de dictar sentencia de trance y remate, aún en el supuesto de que la parte demandada no haya opuesto excepciones (CNCiv., Sala B, 1996, fallo: "Serendipia S.A. c/Municipalidad de Bs. As").

2.2.- En éstos términos el C.T.P. dispone en el artículo N° 175 que: "El juez competente examinará el título con que se deduce la ejecución y, si hallara que es de los comprendidos en el artículo 172 y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, en un solo auto dispondrá que se intime por mandamiento de pago y embargo contra el deudor por la cantidad reclamada, más lo que el juzgado estime para intereses y costas, citándolo de remate para que oponga excepciones en el término de cinco (5) días a contar desde la fecha de notificación."

2.3.- De la interpretación armónica de los preceptos normativos antes citados, puede deducirse que la existencia y la habilidad del título constituyen presupuestos inexorables para el ejercicio de la acción ejecutiva, y que corresponde al juez examinar la concurrencia de los recaudos legales al momento de despachar el mandamiento de intimación de pago y, aún a falta de oposición del ejecutado, al momento de dictar sentencia de trance y remate. La Excm. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán destacó que éste deber legal incluso viene impuesto asimismo a los tribunales de alzada porque el control de oficio de los presupuestos de admisibilidad, es una de las

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL****Escrito: SENTENCIA**

características del juicio de tipo ejecutivo (CSJT, Sentencia N° 800, 21.08.2009; CSJT, Sentencia N° 1082, 10.11.2008; CSJT, Sentencia N° 1178, 28.12.2005; CSJT, Sentencia N° 251, 26.04.2004; CSJT, Sentencia N° 344, 19.05.2004, entre otros pronunciamientos).

2.4.- Así también, nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia en causa: Provincia de Tucumán –DGR- Vs. La Cartujana S.R.L. S/ Ejecución Fiscal, N° Sent. 874, 18.08.2015, sostuvo que conforme ley expresa, y a las conclusiones de la doctrina y jurisprudencia, el juez de la ejecución debe de oficio analizar los requisitos extrínsecos del título y rechazar la ejecución cuando estos no se encontraren reunidos. Incluso, manifiesta, de manera expresa, que ese análisis debe hacerse en todo momento, pero fundamentalmente en dos etapas, a saber: 1) el mandamiento e intimación de pago, y 2) la sentencia de trance y remate.

2.5.- Por ello, la jurisprudencia reiteradamente ha dicho que la inhabilidad de título debe ser decretada por el juez cuando el título no reúna los requisitos necesarios, no obstante que no haya sido opuesta por la parte demandada o no receptada. Además, se infiere que, del mismo modo que de la incontestación de la demanda en un juicio ordinario, no ha de seguirse, necesariamente, una sentencia de condena haciendo lugar a la demanda, con mayor razón todavía ello es predicable del juicio ejecutivo, donde la vía ejecutiva es un privilegio otorgado en consideración de la habilidad del título mismo. Como lo enseñan correctamente los autores: el principio “no hay ejecución sin título” se extiende a la existencia misma del juicio ejecutivo (FENOCHIETTO-ARAZI, op. cit., sobre el art. 531.2), y por ello, cabe incluso “la posibilidad de que la inhabilidad de título sea declarada de oficio por el tribunal de alzada...” (PALACIO, L.: op. cit. N° 1069).

2.6.- En idéntica línea argumental, la CSJN sostuvo de manera reiterada, que aun cuando no es factible ordenar el proceso de apremios que tiene un estrecho marco cognoscitivo, no se puede admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva, como lo es la existencia de una deuda exigible (CSJN, en: “Fisco Nacional c/Mauricio Silbert S.A.”, 23.12.70, Fallos: 278:346; “Fisco Nacional c/Sasetru S.A.”, 06.09.77, Fallos: 298:626. Un análisis doctrinario en: ALTAMIRANO A., Derecho tributario – teoría general, Marcial Pons, Bs. As., 2012, págs 645 y ss.)

2.7.- Cuando nos adentramos al estudio del título base de la ejecución fiscal promovida por la parte actora, surge necesario advertir, incluso, siguiendo a FRANCISCO MARTINEZ, que el título es siempre una declaración documental de la autoridad pública, pero no es “puramente” el certificado de deuda, la boleta de deuda o el cargo tributario que se acompaña a hojas 2 a 5 del expediente judicial de la presente demanda, sino que el título ejecutivo en la materia tributaria viene constituido en un momento que precede al libramiento de dicho certificado, de la certificación, de la boleta de deuda o del cargo tributario, es decir del propio procedimiento administrativo y de su regularidad, que desde un orden lógico y cronológico lo constituye y que fuera ofrecido como prueba y agregado a la presente ejecución a fs. 26: “El título ejecutivo es aquel que ha satisfecho con regularidad el proceso de su formación” (FRANCISCO MARTINEZ, “El título en la ejecución fiscal”, Impuestos, C. XXXIV-B, pág. 1709, Buenos Aires; Idem Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, Registro de Sentencias definitivas N° 6 F° 35/55, Expte. N° SI-2909-2011, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires C/Ghiglione Mario R. S/ Apremio”).

2.8.- Lo que en esencia se persigue es el cobro de una deuda tributaria con sus respectivos intereses, que se encuentran determinados por el Estado dentro de la vía administrativa y que la misma no ha sido pagado por el contribuyente demandado. Como bien lo recalca “WALTER SCHICK” la obligación del Estado de recaudar sus impuestos surge en primer lugar desde “el principio de legalidad de la imposición”, es decir desde la propia creación normativa del impuesto. El segundo fundamento de la obligación del Estado de exigir impuestos es “el principio de igualdad en la imposición”. (SCHICK, W.: “Obligación Fiscal de Recaudar los Impuestos”, en: Obra Colectiva (AA.VV.), Seis Estudios sobre Derecho Constitucional e Internacional Tributario, Editorial de Derecho Financiero – Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1980, pág. 185).

2.9.- Es necesario resaltar, además, que la presente ejecución se solventa en el “deber de contribuir” o de “pagar impuestos”: “Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos”, Art. XXXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (adoptada por la IX Conferencia Internacional Americana, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, 30.03.48, Res. XXX). En idéntico sentido, el Capítulo I, art. 29, de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) reconoce los deberes frente a la sociedad, destacándose el “deber de pagar los impuestos”. Las Declaraciones mencionadas fueron incorporadas a los Tratados Internacionales que integran el Art. 75 Inc. 22 de la CN, las cuales tienen rango y jerarquía constitucional, por lo tanto, son más que deberes éticos que inspiren el cumplimiento, tratándose de verdaderas obligaciones generales de cumplimiento. Conforme RODRIGUEZ BEREJO, el deber de pago de los impuestos o tributos se encuentra dentro de los deberes generales de prestación (RODRIGUEZ BEREJO, Álvaro: “El deber de contribuir como deber constitucional. Su significado jurídico”, Revista Española de Derecho Financiero, 1° 125, enero – marzo, 2005, Civitas, Madrid). La propia consagración constitucional y convencional del “deber de

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL****Escrito: SENTENCIA**

contribuir" implica la existencia de una obligación concreta, cuando el impuesto ejecutado desde el cumplimiento de su hecho imponible hace nacer la obligación de declarar el impuesto y su posterior pago, fundamentándose en la competencia normativa de la Provincia, que en virtud de ley fue previamente establecida.

2.10.- Es por ello que se considera que la ejecución fiscal que hoy se promueve se fundamenta especialmente en el deber de contribuir incumplido para el caso concreto y en su determinación mediante un procedimiento administrativo regular y no por el hecho de no haberse presentado el contribuyente a defenderse u oponer excepciones, pretendiéndose, un consentimiento, que puede ser admitido por el Derecho privado pero no por el Derecho público, que busca justamente la aplicación al caso del principio de la verdad material y objetiva (ESCOLA, H.: Tratado General de Procedimiento Administrativo, Bs. As., Depalma, 2da. Edición, 1981, p. 126; "Cobadillo c. Compañía de Seguros España y Río de la Plata", CSJN, Fallo:238:250, donde se ha dejado sentado que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales), incluso en la vía ejecutiva de la percepción de las rentas públicas, constituyendo un verdadero axioma la doctrina sentada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiterados fallos, según la cual los jueces no están excusados de allegarse a la verdad objetiva, porque la renuncia a la verdad es incompatible con el servicio de justicia, exigiéndose discriminar los distintos aspectos del litigio a fin de lograr en cada hipótesis la justicia aplicada al caso concreto. Como bien lo ha manifestado MICHELE TARUFFO, la verdad despliega una función esencial en el proceso ("La verdad en el Proceso", Derecho & Sociedad, Revista PUCP, Perú, 2013, 40, pág. 243 y ss.).

Es por ello que no debe admitir una condena cuando falta alguno de los presupuestos básicos de la acción ejecutiva como es la existencia de deuda exigible y ello resulta manifiesto de los autos (CSJN, Fisco Nacional c/Mauricio Sibert S.A. – Fallos 278:246; Fallos 295:338). En idéntica línea argumental, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán estableció que tanto la existencia de deuda como su exigibilidad son de la esencia de todo proceso de ejecución, resulta entonces que, planteada la cuestión, nos dice: los tribunales deban considerar si se trata, la ejecutada, de deuda inexistente y exigible, pues no se puede llegar al extremo del rigor formal de condenar a una deuda cuya inexistencia o inexigibilidad luzca palmariamente de las constancias mismas de la causa (CSJT, "Provincia de Tucumán – D.G.R., vs. Cajal, Emma, s/Ejecución Fiscal", 03.11.2008, La Ley OnLine; CSJN, "Provincia de Tucumán – D.G. R., vs. Sodexo Soluciones de Motivación Argentina S.A. s/Ejecución Fiscal", cuya doctrina legal sostiene: "Debe descalificarse como acto jurisdiccionalmente válido aquel que omite tratar y resolver adecuadamente en los juicios de apremios, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el examen de la plataforma fáctica aportada en la propia causa" – Sent. Nro. 1660 de fecha 27 de diciembre de 2016; en igual sentido CSJN: Fallos 312:178, 316:2153, 317:1400, Fallos: 318:646, 318:1151, Fallos: 317:969, 325:1008, entre muchos otros).

El criterio establecido, con referencia al control de oficio de los títulos ejecutivos, ha quedado firme con sendas sentencias dictadas en procesos donde ha participado el Fisco Actor: PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ HERRERA CESAR JAVIER S/ EJECUCION FISCAL (Expte.: 19/19).- SENTENCIA N° 4/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ RUIZ JOSE OSCAR S/ EJECUCION FISCAL (Expte.: 11/19) - SENTENCIA N° 5/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ALIA DIEGO HERNAN S/ EJECUCION FISCAL (Expte.: 63/19). - SENTENCIA N° 6/2019; PROVINCIA DE TUCUMÁN D.G.R. C/ LINARES EMILIO RICARDO S/ EJECUCIÓN FISCAL (Expte.: 97/19) SENTENCIA N° 7/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ LOS NUEVE S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL (Expte.: 73/19) SENTENCIA N° 9/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ MIRANDA NATALIA S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 113/19- SENTENCIA N° 18/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. - C/ ELIAS CARLOS RUBEN S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 71/19- SENTENCIA N° 19/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ HOSPITAL PRIVADO S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 66/19- SENTENCIA N° 20/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ GONZALEZ ISOLINA ESTELA S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 21/19) SENTENCIA N° 22/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ARRENDAR S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE 6/19) SENTENCIA N° 23/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ LAZARTE DAMIAN GUSTAVO S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 15/19- SENTENCIA N° 25/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. - C/ MORENO PEDRO CAYETANO S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 50/19 - - SENTENCIA N° 26 – 2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ LOPEZ BETI ANA SOFIA S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 12/19 - - SENTENCIA N° 27 – 2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ ERCOLE SUSANA ELIDA S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE: 62/19- SENTENCIA N° 29 – 2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ SUCESION DE MARTINEZ MIGUEL AGUSTIN S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 13/19) SENTENCIA N° 30/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ BRODERSEN LUCAS ALBERTO S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 7/19) SENTENCIA N° 37/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ CEBALLOS JOSE INDALECIO S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 1697/18) SENTENCIA N° 49/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR- C/ VILLAFañE MARÍA LORENA, S/ EJECUCION FISCAL (Expte. 88/19) SENTENCIA N° 50/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ MOLINA HERMANOS S.A. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 254/19) SENTENCIA N° 52/2019; PROVINCIA DE

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL**

**Escrito: SENTENCIA**

TUCUMAN D.G.R. C/ AGROTEN S.A. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 107/19) SENTENCIA N° 79/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ HOSPITAL PRIVADO S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE: 412/19) SENTENCIA N° 78/2019; PROVINCIA DE TUCUMAN D.G.R. C/ INDUSTRIA METALURGICA DE PEDRO S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE. 423/19) SENTENCIA N° 1/2020; PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. C/ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL (EXPTE. 492/19) SENTENCIA N° 2/2020.

3.- ANÁLISIS DE LOS CARGOS TRIBUTARIOS N° BTE/3435/2019 Y BTE/3439/2019

3.1.- Frente a lo manifestado precedentemente, se hace necesario el análisis de los presupuestos estructurales de los títulos ejecutivos.

3.2.- Para ser válido y exigible, toda boleta o certificado de deuda, debe contar por lo menos con los siguientes requisitos formales, según lo establece el art. 172 del CTP: "...Los créditos tributarios se harán efectivos de acuerdo al procedimiento establecido en este Código. A este efecto, constituye título suficiente la boleta de deuda expedida por la Autoridad de Aplicación. Esta última deberá ser suscripta por el Director General o los funcionarios en quienes expresamente delegue tales funciones, debiendo, además, contener: 1. Identificación del deudor. 2. Domicilio fiscal del deudor. A los efectos establecidos en el presente título, en los casos de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores y Rodados, podrá considerarse como domicilio fiscal el domicilio del inmueble y el de radicación del vehículo automotor, respectivamente, y para el caso del Impuesto de Sellos el o los domicilios que las partes hayan constituido en el instrumento respectivo. 3. Período/s fiscal/es adeudado/s. 4. Número de partida, cuenta, patente o padrón. 5. Concepto de la deuda. 6. Importe original de la deuda impaga, discriminando el impuesto, tasa, contribución y multas. 7. Lugar y fecha de su expedición. 8. En los casos de nombres comunes deberá expresarse el segundo apellido, si hubiera constancia del mismo en la Autoridad de Aplicación..."

3.3.- Con respecto a los títulos base de la ejecución, los mismos contienen:

1) La identificación del deudor: surge bien identificado con su nombre y CUIT (hojas 2 a 5); 2) El domicilio fiscal el deudor denunciado en las BD (hojas 2 a 5): Rivadavia 156 Planta Alta Departamento 16 – Concepción - Tucumán; 3) Períodos fiscales adeudados: períodos 1 a 11/2013, con sus respectivos intereses calculados al momento de la emisión de las Boletas de Deudas; 4) Número de partida, cuenta, patente o padrón: 290535 inserto en las BD (hojas 2 a 5); 5) Concepto de la Deuda: 5.1) BTE/3435/2019 es por el siguiente concepto: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – EJECUCION DE SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA PD 1012/2016 ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA); 5.2) BTE/3439/2019 es por el siguiente concepto: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – INTERESES – EJECUCION SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA DE INTERESES ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA). 6) Importe original de la deuda impaga, discriminando el impuesto, tasa, contribución y multas: La Boleta de Deuda BTE/3435/2019 incluye como importe original (capital) la suma de \$ 3.734.273,02. La Boleta de Deuda BTE/3439/2019, incluye como importe original (intereses) la suma de \$1.379.160,72. 7) Lugar y fecha de la expedición: las Boletas de Deuda en ejecución fueron expedidas en San Miguel de Tucumán, 23/08/2019.

3.4.- Del análisis realizado de los títulos y de las boletas de deuda acompañadas en original se llega a la conclusión que las mismas fueron realizadas de conformidad con el art. 172, las que, además, como actos administrativos unilaterales del Estado gozan de presunción de legitimidad (Art. 47 de la Ley de Procedimientos Administrativos de Tucumán).

Del Expediente Administrativo surge lo siguiente: a hojas 524/537 surge el Acta de Deuda N° A 1012/2016, notificada en fecha 06/1/2017 a Anzuc S.R.L.; en fecha 28/11/2017 la empresa demandada presenta su descargo al Acta de Deuda notificada (hojas 541/548); en hojas 563/569 consta el Dictamen Jurídico previo a la Resolución; en hojas 570/573 se encuentra la Resolución N° D 136/18 de fecha 21/03/2018, notificada en fecha 23/03/2018 (hoja 574); en fecha 18/04/2018 Anzuc S.R.L. interpone Recurso de Apelación; de hojas 599/609 surge la contestación de la DGR; en fecha 21/05/2019 el Tribunal Fiscal dicta sentencia N° 551/19 haciendo lugar parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por Anzuc S.R.L. en contra de la Resolución N° D 136/18 de fecha 21/03/2018 emitida por la DGR, confirmando en consecuencia las nuevas planillas "Planilla Determinativa N° PD 1012-2016 Acta de Deuda N° A 1012-2016 - Etapa Recursiva" por un importe de \$3.734.273,02 -pesos tres millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con 02/100- (hojas 614/628); finalmente, a hoja 668 consta la elevación del Expte. Administrativo de la Directora General de la DGR a la División Control de Cobros Judiciales a los fines de que emita los Títulos Ejecutivos ahora en ejecución.

3.5.- En la causa se ejecutan los períodos 1 a 11/2013 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e intereses: BTE/3435/2019 - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – EJECUCION DE SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL****Escrito: SENTENCIA**

DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA PD 1012/2016 ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA); 5.2) y BTE/3439/2019 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – AGENTE DE PERCEPCION – INTERESES – EJECUCION SENTENCIA TRIBUNAL FISCAL DE APELACION – SENTENCIA 551/19 – ACTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACION DE OFICIO (RESOLUCION D 136/18 – PLANILLA DETERMINATIVA DE INTERESES ACTA DE DEUDA A 1012/2016 ETAPA RECURSIVA).

3.6.- No se escapa al sentenciante que estando debidamente intimada de pago y citada de remate la ejecutada ha dejado vencer el plazo para contestar excepciones legales, situación que no excluye, como sostuvimos, el análisis del título realizado, y conforme dicha circunstancia y de los demás fundamentos vertidos en la presente sentencia, entendemos que la ejecución debe prosperar por el capital demandado y sus respectivos intereses, como lo dejaremos específicamente fundado.

3.7.- Es dable advertir que hemos tenido la ocasión de resolver en la sentencia Nro. 32/2019, Provincia de Tucumán c/T.F.R. s/Ejecución Fiscal, Expediente Nro. 61/19, una cuestión similar, pero al no ser un caso idéntico al presente no resulta aplicable dicho criterio en estos autos. En dicha oportunidad se resolvió no hacer lugar a la duplicidad de intereses que tienen en definitiva idéntica naturaleza, intereses sobre anticipos, no estando presentes obligaciones anuales. La plataforma fáctica del presente caso en análisis no es la misma, por ello no vamos a seguir los lineamientos de la decisión que arribáramos en la mencionada causa (sentencia Nro. 32/2019, Provincia de Tucumán c/T.F.R. s/Ejecución Fiscal, Expediente Nro. 61/19), no pudiéndose aplicar dicho criterio jurisprudencial para la presente ejecución. Esta situación no excluye el hecho de tener particular atención al tema de exceso en el cobro de los intereses legales de conformidad con lo sostenido por la CSJN en la causa “Repartidores de Kerosene de YPF de Córdoba” (Fallos: 306:197), luego de afirmar que el deber de tributar le corresponde un derecho del Fisco a recaudar, derecho que encuentra su límite en la definitiva configuración del hecho imponible, en una efectiva exteriorización de la capacidad contributiva, que: “si la recaudación de los tributos pierde su fundamento esencialmente impositivo para convertirse en un fenómeno exclusivamente financiero generador de intereses y actualización sobre deudas inexistentes, ello importa una indudable distorsión de las bases éticas del derecho de recaudar” (Fallos 306:197). Incluso, lo sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala V, 04.12.2018, “Pistrelli Henry Martin Asociados SRL c. EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, La Ley OnLine, AR/JUR/74330/2018 (fallo no firme), en un caso del Impuesto a las Ganancias, donde se ponderan los intereses de los anticipos cuando se presenta la Declaración Jurada anual respectiva, expresó que los intereses de los anticipos deben ceder y por lo tanto deben ser revocados cuando por presentación de la Declaración Jurada anual ha desaparecido su condición de anticipo.

Conforme la jurisprudencia de la Excm. Cámara de Documentos y Locaciones de de la Provincia de Tucumán – “Provincia de Tucumán -D.G.R.- c/Bio Trinidad S.A., s/Ejecución Fiscal”, nada hay que reprochar al hecho de ejecutar posiciones anuales, con lo cual resulta insuficiente para invalidar al título como tal dicha circunstancia, en tanto surge de las constancias del Expediente Administrativo que el demandado fue debidamente notificado y, por lo tanto, tuvo pleno conocimiento de las posiciones adeudadas en cada periodo fiscal reclamado en el título ejecutivo, incluyendo sus intereses. Caso idéntico se presenta en autos. Adoptándose en el presente, criterio similar a la sentencia de Cámara que ha sido receptado positivamente incluso por nuestra Corte Suprema de Justicia Local.

Situación diferente es, justamente, dentro del control de oficio del título ejecutivo, analizar que los “intereses” no sean duplicados, por error, o, por la voracidad recaudatoria del fisco actor.

3.9.- Con respecto al cargo tributario N° BTE/3435/2019 se observa que el concepto de la deuda surge de aquellos contribuyentes que deberían haber sido sujetos de percepción por parte de la firma ejecutada y que la misma ha omitido realizar las percepciones. La DGR procedió a integrar la relación jurídico tributaria, siguiéndose los lineamientos de la CSJT en la causa “Bercovich”, con las operaciones realizadas por la empresa dentro del periodo fiscal 01 a 11 de 2013, donde surge acreditado cuáles son los contribuyentes que han operado con la firma y no han pagado el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la jurisdicción Tucumán al fisco, procediéndose a la extensión de la deuda tributaria en solidaridad al contribuyente ANZUC S.R.L., conforme el Art. 32 del CTP. La deuda solidariamente atribuida a la sociedad debe prosperar con sus respectivos intereses resarcitorios y punitivos, que fueran calculados a hojas 31 del expediente judicial por el Cuerpo de Contadores Civiles de este Centro Judicial.

3.10.- Como bien lo sostiene la jurisprudencia, la ley atribuye a ciertos sujetos (agentes de retención/percepción) el deber o la obligación tributaria formal de practicar retenciones o percepciones por deudas tributarias, sobre los fondos que se disponen cuando en su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la norma legal, en nuestro caso el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Art. 214 del CPT: “Grávase con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme las alícuotas que se establecen en la Ley Impositiva, el ejercicio habitual y a título oneroso, en jurisdicción de la Provincia, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no-, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas no exentas expresamente por esta Ley,

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL****Escrito: SENTENCIA**

y el lugar donde se realice (espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado, etc.). (...) La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica. Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo, en el ejercicio fiscal, de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando ellos sean efectuados por quienes hagan profesión de tales actividades. La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua. (...). Ello en razón de una disposición expresa que así lo ordena y atendiendo a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria (Fallos: 308:442, considerando 4to).

3.10.- En similar criterio la causa Hochtief Construcciones S.A. y otro c/ Comisión Nacional de Energía Atómica -C.N.E.A.- s/ contrato de obra pública, nuestra CSJN, ha manifestado: "...Que la ley le atribuye a ciertos sujetos (agentes de retención) el deber de practicar retenciones por deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que disponen cuando con su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la norma legal.

Es por virtud de la ley, también, que se hallan obligados a ingresar al fisco los importes retenidos en el término y las condiciones establecidas, puesto que tal actividad se vincula, en lo que interesa, con el sistema de percepción de los tributos en la fuente, en razón de una disposición expresa que así lo ordena y atendiendo a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria (Fallos: 308:442, considerando 4°).

Con independencia de la condición que se le asigne a la actuación de dichos agentes -pareciera que en doctrina se han elaborado las tesis más variadas: vgr. agentes del fisco; sujetos que cumplen una carga pública; mandatarios del fisco- lo cierto es que la ley los instituye en responsables del ingreso del tributo debido, previéndose como única dispensa por no retener o no ingresar oportunamente el importe retenido, la acreditación de que el contribuyente ingresó el gravamen (ver fallos cit. ant. y art. 18, inc. c, ley 11.683, t.o. en 1978).

Asimismo, pesa sobre el agente de retención la amenaza de verse expuesto a las sanciones que el ordenamiento legal prevé pues "responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo..., sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas" (ver art. 18 de la ley 11.683, texto citado). En síntesis, el deber de actuar como agente de retención constituye una obligación legal, cuyo incumplimiento hace nacer en cabeza de aquél no sólo una responsabilidad patrimonial sino también, eventualmente, una de naturaleza penal...". (Hochtief Construcciones S.A. y otro c/ Comisión Nacional de Energía Atómica -C.N.E.A.- s/ contrato de obra pública, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1998).

3.11.- El art. 29 del CTP enuncia el principio general: "Responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos". Luego el art. 32 del CTP establece que: "Son responsables en carácter de agentes de retención, de percepción o recaudación los sujetos designados por la ley o por el instrumento correspondiente, según la autorización legal prevista en el párrafo siguiente y en otras leyes especiales, que por sus funciones públicas o por razones de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos y operaciones en las cuales puedan efectuar la retención, percepción o recaudación del tributo correspondiente. La Dirección General de Rentas queda facultada para designar agentes de retención y/o percepción y/o recaudación y/o información". Y en el Art. 9° inc. 10 del CTP establece que: "Para el ejercicio de sus funciones, la Autoridad de Aplicación tendrá -sin perjuicio de otras establecidas en este Código o leyes especiales- las siguientes facultades: ... 10. Dictar normas generales y obligatorias con relación a los agentes de retención, percepción, recaudación e información y establecer las obligaciones a su cargo...".

3.12.- Aquí conviene detenernos, a fin de definir qué se entiende por Agente de Percepción. La propia administración tributaria a nivel nacional ha definido al Agentes de Percepción como aquellas personas (humanas o jurídicas) "que por su profesión, oficio o actividad se encuentran en la situación de recibir del contribuyente una suma de dinero a cuyo monto originario deben adicionar el tributo que luego ingresarán al Fisco" (Dictamen de Asuntos Técnicos y Jurídicos N° 24/1979 – 30/07/1979 – Dirección General Impositiva). Con relación a la delegación contenida en el art. 9 inciso 10) en el Dictamen N° 24/1979 la Administración Nacional ha mencionado claramente los parámetros para una delegación válida: "Para que la delegación sea constitucionalmente válida, el órgano legislativo debe definir con todos sus elementos la cuestión regulada y habilitar al ejecutivo para que 'ensanchando' su función reglamentaria, precise y especifique los enunciados generales que, comúnmente, por su contenido técnico requieren de la participación de un cuerpo administrativo especial". ... "En esta materia, como se dijo, domina el principio de la legalidad del impuesto, por lo que la delegación de facultades para ser constitucionalmente válida sólo puede referirse a los elementos secundarios o accesorios de la relación jurídica que se entabla entre el Fisco y el contribuyente. Así se señaló: "... En el orden fiscal, o más propiamente impositivo, el reglamento delegado no es admisible más que en aquella parte puramente administrativa, o que concierne a los actos de recaudación o percepción de las contribuciones, y, claro está, a las operaciones de determinación del impuesto. En materia de impuesto el legislador no puede delegar en el Poder Administrador la determinación de los contribuyentes, ni el "

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL****Escrito: SENTENCIA**

quantum' del impuesto, porque éste debe ser siempre consentido por los representantes de los contribuyentes, o sea que tanto las personas grabadas por aquél, como la causa y el monto de la contribución deben ser establecidos por ley formal..." (cfr. Dictamen Asesoría Legal y Técnica N° 24/1979 – 30/07/1979). Por último, el Dictamen (DGI) N° 24/1979 ya citado también ha definido –a nivel nacional- lo que se entiende por responsable solidario: "Los responsables solidarios, por su parte, son los sujetos ajenos al hecho imponible, que, colocados por el legislador junto al contribuyente, formalizan una relación en la que coexisten, indistintamente, ambos obligados".

3.13.- Analizando el carácter de responsable solidario de los agentes de percepción, nuestra CSJ en la causa "Bercovich" – similar a la causa "Farías"- expresa: "...Ahora bien; en nuestra legislación tributaria no existe la menor duda al respecto por cuanto, como bien lo resalta el pronunciamiento en recurso, el artículo 31 de la Ley N° 5.121 preceptúa expresamente que "Efectuada la retención, percepción o recaudación, el agente es el único responsable ante el Fisco, por el importe retenido, percibido o recaudado. De no realizar la retención, percepción o recaudación, responderá solidariamente ... No cabe duda, entonces, que en el presente caso en el cual la determinación de oficio de la deuda que se impugna obedece a la falta de percepción, la referida disposición en su última parte deja al lado del agente de percepción al contribuyente, por lo que ambos son responsables solidarios de la obligación tributaria, siéndolo aquél por deuda ajena y no propia, como el contribuyente". Y el fallo descripto concluye lo siguiente: "...Por lo demás, es de toda evidencia que en la inteligencia de la ley existe diferencia según sea el comportamiento adoptado por el agente de percepción. Es que si, como se colige del texto del artículo 31 de la Ley N° 5.121, el agente efectuó la percepción, bien está que sólo él quede como responsable frente al Fisco y desobligado el contribuyente debido a que con la efectiva percepción practicada ya cumplió con su obligación tributaria, más allá que el agente ingrese o no la suma correspondiente a las arcas del estado. Y para el supuesto de no haber practicado la percepción, nada hay de objetable y resulta, por lo tanto, razonable, que el contribuyente y el agente sean responsables solidarios, por tratarse de situaciones fácticas diferentes, aquella de esta otra. Lo dicho contribuye a deslegitimar el resultado revocatorio pretendido por el demandado basado en esta cuestión...". (véase sentencia 185/2014 del 14 de marzo de 2014, "BERCOVICH S.A.C.I.F.I.A. VS. PROVINCIA DE TUCUMÁN S/NULIDAD/REVOCACIÓN).

3.14.- A nivel nacional y local se ha mantenido idéntico criterio en las causas: "BRUTTI" (FALLOS 327:769) y "BOZZANO RAÚL JOSÉ C. DGI" (CSJN, 11 de febrero de 2014) y de los fallos "JOSÉ FARÍAS E HIJOS" (Sentencia Nro. 1316 – CSJTuc, 22/12/2008), "MIJASI" (Sentencia 661/2013, del 04 de septiembre de 2013), "BERCOVICH SACIFIA Vs. Provincia de Tucumán" (Sent. 185-2014) y "Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi LTDA. vs. Provincia de Tucumán –D.G.R.- s/nulidad/revocación" (Expte. N° 151/10, sent. De fecha 12 de junio de 2015). Es pues por ello que resulta inconstitucional por arbitrario y lesivo de las garantías del debido proceso y de defensa -y por lo tanto inconvencional- un procedimiento tributario que no prevea la integración de la relación jurídica tributaria bajo los estándares de la solidaridad y que presuma, sin antes acreditar -aunque sea sumariamente-, la deuda del contribuyente principal y la extensión de la responsabilidad solidaria al agente responsable por deuda ajena. Dicha situación no se ha observado en la causa, como se lo ha inferido con el estudio del título, donde se ha cumplimentado con el derecho de defensa tanto dentro de las impugnaciones ante la DGR cómo los recursos instrumentados al Tribunal Fiscal de Apelaciones. En esa inteligencia, vale destacar que se ha dado la posibilidad -en los actuados seguidos contra la ejecutada en la vía administrativa- de demostrar que los contribuyentes que han cumplido el hecho imponible de la norma tributaria han pagado su impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia y en qué medida se producido un perjuicio o lesión del bien jurídico protegido por el sistema jurídico, es decir la Renta Pública. Cuestión que ha sido sustanciada por vía sumaria y de manera previa al acto de determinación de oficio frente al contribuyente y al responsable. Por dicho mérito la demanda debe prosperar en lo referente al cargo tributario analizado.

3.15.- Con respecto al cargo tributario N° BTE/3439/2019 se observa que el concepto de la deuda surge de una planilla de intereses. A ello corresponde una aclaración, no son los intereses resarcitorios del cargo tributario N° BTE/3435/2019 que la DGR pareciera confundir, incluso dentro de los argumentos de la demanda. Los intereses establecidos corresponden a operaciones con sujetos pasibles de percepción que registran presentación de las Declaraciones Juradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y cancelación total de su obligación tributaria -a diferencia del anterior cargo tributario analizado que no tenían presentación de DJ o la tenían presentada pero no cancelada- motivo por el cual la firma fiscalizada quedó liberada del capital sobre las percepciones omitidas, pero no así del interés resarcitorio. Por lo tanto, según el acta de determinación de deuda y el fallo del Tribunal Fiscal de Apelaciones, en el cual se asientan, determinados desde el vencimiento del pago de la DJ presentada por el sujeto pasible dentro del periodo fiscal 1 a 11/13 hasta la fecha de su cancelación o hasta la fecha de que recupera la condición como inscripto el sujeto pasible y que resulte regularizado a dichos efectos.

Como bien lo recalca RODRÍGUEZ BEREJO (en: "El sistema tributario en la Constitución (los límites al poder tributario en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional)", Revista Española de Derecho Tributario Constitucional,

**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL**

**Escrito: SENTENCIA**

Nro. 12, 1992, pp. 65 y ss.): "...en un sistema tributario de masas, sin la colaboración del contribuyente y de las personas que tienen relación con el hecho imponible ... sería imposible llevar a cabo el proceso de aplicación de los tributos..."

3.16. Frente al análisis del Cargo Tributario N° BTE/3439/2019, entendemos debe proseguirse con la ejecución, en tanto se ha corroborado que no existe duplicidad en el cómputo de los intereses, sino obligaciones tributarias independientes resultantes del interés resarcitorio computable al sujeto pasible cuando éste no ha presentado DJ y pagado la obligación y con posterioridad la misma es cancelada, no pudiéndose analizar más profundamente su estatus "legal" y material del cumplimiento de la obligación, atento al marco reducido de apreciación y análisis del proceso de ejecución fiscal o apremios.

3.17.- Por último, del análisis del expediente administrativo, referenciado y acompañado al presente expediente, surge que los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos –Agente de Percepción- periodos 1 a 11/2013 (Cargo Tributario N° BTE/3435/2019) y los intereses por los mismos períodos (Cargo Tributario N° BTE/3439/2019) fueron determinados de oficio por el fisco y que a la fecha siguen siendo adeudados.

3.18.- El art. 50 del CT Local es claro en sostener que la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, recaudaciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.

3.19.- En consecuencia, con lo expuesto corresponde hacer lugar a la demanda y llevar adelante la presente ejecución.

**4.- INTERESES:**

En virtud de lo establecido en el Art. 50 y 89 del CTP:

A- Los intereses resarcitorios de la deuda que se ejecuta ascienden a la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTAMIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 03/100 PESOS (\$ 9.580.432,03) calculados desde las fechas de vencimientos de las obligaciones hasta la fecha de interposición de la demanda. Se excluye del cálculo el Cargo Tributario BTE/3439/2019, ya que los mismos son por intereses para evitar el anatocismo.

B- Los intereses punitivos, de ambos cargos tributarios ejecutados, asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIEZMIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 PESOS (\$ 1.610.784,25), calculados desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente sentencia.

**5.- COSTAS Y HONORARIOS**

Atento al resultado arribado, corresponde imponer las costas del presente proceso a cargo de la demandada (Art. 105 CPCC).

Atento a lo normado en el art. 20 de la ley 5.480, corresponde regular honorarios profesionales al abogado PATRICIO R. ARGOTA.

En tal sentido se tomará como base el capital reclamado en el escrito de demanda (Art. 38), es decir la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 74/100 (\$ 5.113.433,74).

Tomando en cuenta dicha base, el carácter en que actúa el abogado apoderado (doble carácter), y lo normado por los Arts. 1, 3, 14, 15, 38, 44 y 63 de la Ley 5.480 y concordantes, realizados los cálculos aritméticos correspondientes, (cálculos base: \$ 5.113.433,74 - 50% (Sin Excepciones) + 11% (Vencedor) + 55% (doble carácter) = \$ 435.920,23), el resultado obtenido es de \$435.920,23.

Por ello, se regula la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 23/100 (\$435.920,23) en concepto de honorarios profesionales a favor del abogado PATRICIO ROMAN ARGOTA, CUIT N° 20-25923019-6, con más la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100 (\$91.543,25) en concepto de Impuesto al Valor Agregado.

Por ello, dicto la siguiente sentencia.

**6.- SENTENCIA:**

PRIMERO: HACER LUGAR a la demanda interpuesta por la PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. en contra de ANZUC S.R.L., CUIT Nro. 30-71098220-8. En consecuencia, llevar adelante la presente ejecución, por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCOMIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 29/100 PESOS (\$ 14.925.489,29), monto que se encuentra integrado por los siguientes conceptos: Importe de capital (\$3.734.273,02) más intereses resarcitorios calculados a la fecha de la interposición de la demanda (\$9.580.432,03), más intereses punitivos calculados desde la fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de la presente sentencia (\$1.610.784,25).

SEGUNDO: Las costas se imponen a la ejecutada vencida (art. 105 CPCC Tuc).

TERCERO: REGULAR al abogado PATRICIO ROMAN ARGOTA, CUIT N° 20-25923019-6, la suma de \$435.920,23 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 23/100) en concepto de



**409/19 PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. C/ ANZUC S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL**

**Escrito: SENTENCIA**

---

honorarios profesionales, más la suma de \$91.543,25 (PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100) en concepto de Impuesto al Valor Agregado, conforme a lo considerado.

CUARTO: Comunicar a la caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores a los efectos de dar cumplimiento con la Ley 6.059.

QUINTO: Proceda la Secretaria Actuarial a la confección de la correspondiente planilla fiscal.

HAGASE SABER

---